

**EL MUNDO**  
ANDALUCÍA  
GRUPO UNIDAD EDITORIAL

**DIRECTOR:**  
PEDRO J. RAMÍREZ.

**DIRECTOR DE EL MUNDO DE ANDALUCÍA:** Francisco Rosell.  
**VICEDIRECTORES:** Casimiro García-Abadillo, Miguel Ángel Mellado.  
**DIRECTORES ADJUNTOS:** Iñaki Gil (Información), Juan Carlos Laviana (Orbyt), John Müller.  
**ADJUNTOS AL DIRECTOR:** Victoria Prego, Eduardo Inda.  
**SECRETARIO GENERAL DE REDACCIÓN:** Aurelio Fernández.

**DIRECTOR DE ARTE:** Carmelo G. Caderot.  
**DIRECTOR ELMUNDO.ES:** Fernando Baeta.  
**DIRECTOR DE DOCUMENTACIÓN:** Julio Miravalls.  
**PRESIDENTE DEL CONSEJO EDITORIAL:** Jorge de Esteban.

Fundado en 1989 por Alfonso de Salas, Pedro J. Ramírez, Balbino Fraga y Juan González.

**PRESIDENTE:** ANTONIO FERNÁNDEZ-GALIANO.  
**VICEPRESIDENTES:** Giampaolo Zambelletti, Alejandro de Vicente.  
**DIRECTORA GENERAL:** Eva Fernández.  
**DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD:** Jesús Zaballa.  
**DIRECTORA PUBLICIDAD:** Carmen Nieto  
**EDITA:** Unidad Editorial Información General. S. L. U.



## La reforma local apunta hacia la buena dirección

LA REFORMA de la Administración Local sigue siendo una de las asignaturas pendientes de este Gobierno. Ayer el Consejo de Ministros aprobó un informe de Hacienda, que propone una serie de medidas para ahorrar 7.100 millones de euros. Este informe será remitido al Consejo de Estado, cuyas sugerencias serán tenidas en cuenta para elaborar un anteproyecto de ley. Por tanto, lo primero que hay que pedir al Gobierno es que acelere este proceso, de suerte que el anteproyecto pueda estar en el Congreso en el plazo de un mes, como informaron ayer fuentes del Ejecutivo que se pretende.

Resulta difícil estar en desacuerdo con la filosofía y las medidas que se recogen en este informe, que van dirigidas a racionalizar el gasto de los ayunta-

mientos, que en la práctica es incontrolable, ya que los grandes municipios han creado una maraña de empresas públicas que no rinden cuentas a nadie y los pequeños no hacen público lo que ingresan y lo que gastan. Según Hacienda, se desconoce la contabilidad del 96% de las entidades locales menores.

Igualmente, Hacienda aporta un dato que debería mover a la reflexión: el gasto medio total de los servicios específicos municipales es el triple en una población menor de 50.000 habitantes que en las mayores de 100.000. Ello refuerza la necesidad de crear economías de escala en los ayuntamientos.

En concreto, el informe plantea calcular el coste estándar de cada servicio municipal y, si hay una desviación importante, apunta a que deberían ser las diputaciones las que lo prestaran. Ello podría ser una importante fuente de reducción del gasto, ya que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes quedarían reducidos a una estricta representación política sin capacidad de gestión. Igualmente se crean mecanismos para evitar las duplicidades, de suerte que las comunidades tendrán que asumir las competencias en materia de sanidad, servicios sociales y educación que pres-

tan los municipios y que hoy no son remunerados, agudizando los déficits y la deuda de los ayuntamientos. Por otro lado, los alcaldes de las ciudades con más de 500.000 habitantes no podrán superar el sueldo de los secretarios de Estado, mientras que los de municipios de menos de 1.000 habitantes no cobrarán cantidad alguna. En cuanto a los concejales, habrá un porcentaje que tampoco percibirá ingresos.

Estas propuestas recibieron ayer una respuesta inmediata de los Gobiernos del País Vasco y Cataluña, que se niegan a aplicarlas. La Generalitat aseguró que las competencias en materia local están transferidas y que, por tanto, no se sienten obligados a seguir esas recomendaciones. Y un portavoz de Ajuria Enea afirmó que no se respeta la tradición del foralismo vasco. Incluso Andalucía aseguró que estas iniciativas constituyen «un ataque brutal» al municipalismo.

Dado que el consenso es imposible, el Gobierno debe utilizar todos los recursos legales para imponer el acatamiento de este plan de austeridad, que, a nuestro juicio, es bastante equilibrado y refuerza los controles de la intervención pública. Lo que hace falta ahora es voluntad política para llevarlo a cabo.

Los expertos dan entrada a las comunidades

## ¿Repetirá la universidad el error de las cajas?

EL MINISTRO de Educación tiene ya encima de su mesa el informe de la comisión de expertos para la reforma universitaria. El documento contiene propuestas acertadas y otras discutibles. Entre las primeras, figuran los cambios para erradicar uno de los grandes males de la universidad española: la endogamia. Los expertos proponen que los centros no puedan fichar a sus propios doctores durante tres años y abren la puerta a los profesores extranjeros. Lo más discutible es la entrada de las comunidades autónomas en los consejos rectores, aunque sus representantes no podrán haber sido cargos públicos en los tres últimos años. Una condición insuficiente, si tenemos en cuenta la desastrosa experiencia de las cajas de ahorro, donde los partidos situaron a sus amigos y conocidos.

Siguen sin informar de su verdadero estado

## La foto de Chávez, una manipulación más

LOS PARTIDARIOS del Cid Campeador sacaron a Rodrigo Díaz de Vivar después de muerto para asustar a sus enemigos. El presidente Hugo Chávez está vivo en La Habana, pero se desconoce su verdadero estado. El régimen chavista difundió ayer una foto en la que se le ve con su familia. La intención es clara: legitimar el golpe blando de Maduro y los partidarios del presidente, que siguen en el poder con el pretexto de que le están guardando el sillón a su jefe. No sólo no se ha respetado la Constitución, sino que se pretende engañar al pueblo venezolano con una foto que nada indica sobre su estado físico tras la última operación.



Absuelto un hombre que llevaba 11 años preso

## Cuando las imágenes condenan por error

EL SUPREMO ha absuelto a un hombre que ha pasado 11 años en prisión por delitos de robo y homicidio en grado de tentativa. Las imágenes de la cámara de vídeo de un banco propiciaron su condena. Posteriormente, nuevos análisis de la grabación identificaron al verdadero culpable, contra quien se querelló el padre de la víctima del error. El sorprendente caso pone de manifiesto que los tribunales se equivocan y pueden condenar a inocentes con niveles de prueba insuficientes. Si las imágenes grabadas engañan, también podría hacerlo el recuerdo de dos testigos al identificar a un hombre en un tren. Zougam cumple una pena de miles de años únicamente porque dos mujeres rumanas le señalaron y una de ellas sólo fue considerada víctima del 11-M después de reconocerle.

IDÍGORAS Y PACHI



LA TRONERA

ANTONIO GALA

## Vergüenza nacional

LA MORTANDAD que están causando los desahucios escalofría. Quizá convendría crear un ministerio dedicado al asunto. O quizá un amplio consejo de ministros especialistas, si es que existen. La falta de solidaridad, en este tema y en otros, escalofría: se ha perdido el concepto de *nación* no sé por qué extraños callejones. Y no hay día en que alguien no se sacrifique —también a pares— antes de abandonar la que fue su casa (garantizada por la Constitución). A mí me parece un tema mucho más importante que el de aprehender bajo leyes a 400 ladrones, por llamarlos como es debido, o a 100 independentistas, por llamarlos como no quieren ser llamados, o a *consejeros* de bancos, bankias y otras auditorías forrados de tanto trinconeo entre bastidores. Se nos ha endurecido el alma: ¿España fue así siempre: insolidaria y monstruosa? Si alguien tuviese la cabeza y el corazón en su sitio se tomarían medidas urgentes, aparte de esa de mandar a paseo a la Mato (o no la mato), que nos tiene hasta el moño. Cualquier vida anónima vale más que la suya. Que alguien se responsabilice de algo aquí. O nos vamos, y que empiece otra vez la Reconquista. Seguir así es una vergüenza nacional.

## ANDALUCÍA

# PSOE y PP pierden votantes según un sondeo que ratifica el hartazgo andaluz

Un 80,7% se siente «poco o nada satisfecho» con el funcionamiento de la democracia

Sevilla

La consistencia de la crisis económica y la multiplicación de los escándalos de corrupción pasan factura en Andalucía a los dos grandes partidos, PP y PSOE. Es la conclusión principal del Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (Egopa) de invierno de 2013 presentado ayer en Sevilla por el Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía (Cadpea), dependiente de la Universidad de Granada.

Dicho sondeo –realizado entre el 8 y el 24 de enero a partir de 1.200 entrevistas telefónicas en toda Andalucía– indica que, de celebrarse ahora elecciones autonómicas, socialistas y populares empeorarían sus resultados, mientras que IU-CA mejora en tres puntos su intención de voto y UPyD lograría representación parlamentaria. La fuerza más votada sería el PSOE-A con el 38% de los votos (1,3 puntos menos que en marzo de 2012) frente al 34,4% que obtendría el PP-A (6,2 puntos menos), lo que sitúa la diferencia de estimación de voto entre las dos fuerzas mayoritarias en 3,6 puntos.

Izquierda Unida seguiría como tercera fuerza pero ahora con el 14,25% de los votos. UPyD se consolida como cuarta fuerza con el 6,4% de los sufragios (frente al 3,3 del 25-M). El Partido Andalucista ocuparía el quinto puesto con el 2,6%, una décima más que en las autonómicas.

Los andaluces suspenden a la casi totalidad de las instituciones autonómicas, con la peor nota para las diputaciones provinciales (3,38) y el Parlamento (3,56). Sólo aprueban las universidades, con 6,21, y el Defensor del Pueblo Andaluz, con un



La profesora Carmen Ortega ayer durante la rueda de prensa en la que se desgranó la encuesta. / ESTHER LOBATO

5,14. Así, la Presidencia de la Junta obtiene un 3,84; la Administración andaluza, un 3,79; el Gobierno autonómico, un 3,72; el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), un 3,74; la Administración local, un 3,83; el Consejo Consultivo, un 3,59; el Ayuntamiento de su ciudad, un 4; la Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía, un 4,09, y el Consejo Audiovisual de Andalucía, un 4,06.

Otro dato a destacar es que el 80,7% de los andaluces se siente poco o nada satisfecho con el fun-

cionamiento de la democracia, frente a un 19% que sí reconoce que está muy o bastante satisfecho. El 77,3% reconoce que no se siente identificado con ningún partido político, frente a un 22,6% que sí está identificado con una formación.

El Egopa refleja, según señalaron los profesores Ángel Cazorla y Carmen Ortega durante su presentación, un importante desinterés de los ciudadanos por la política y, sobre todo, desconfianza. Siete de cada diez ciudadanos expresa un po-

sicionamiento negativo ante la política, con la desconfianza en primer lugar (45,8%), seguida de la irritación (27,3%).

El 72% de los ciudadanos estima que la situación política de Andalucía es mala o muy mala. El porcentaje sube al 81,5% si se pregunta de la situación política española.

Respecto a la gestión del Gobierno andaluz, el 51,9% de los ciudadanos la califica de bastante o muy mala, frente a un 21,6% que la considera muy o bastante buena y un

23,8% que dice que «ni buena ni mala». Respecto a la valoración que hacen del Gobierno de coalición PSOE-IU, para el 49,3% se decanta por el mal o muy mal, frente a un 35,6% que opta por el bien o muy bien y un 10,7% que dice regular.

En cuanto a la labor de oposición del PP-A, el 68,7% la califica de bastante o muy mala, frente a un 10,9% que la ve muy o bastante buena y un 14,2% que dice que «ni buena ni mala».

Respecto al Gobierno de Mariano Rajoy, más del 50% de los ciudadanos lo ve muy o bastante malo, frente a un 26,1% que lo ve muy o bastante bueno y un 18,2% que

## De las instituciones andaluzas sólo aprueban el Defensor y las universidades

dice que ni bueno ni malo.

El 77,1% de los encuestados confía poco o nada en la actuación del Gobierno andaluz en materia económica, frente a un 16,9% que dice que sí confía mucho o bastante. El 58,6% considera malas las propuestas del PP-A en materia económica, frente a un 12,7 que las ve bien. El 36% de los ciudadanos cree que no hay ningún partido capacitado para gobernar Andalucía en materia económica, si bien un 23,7% se decanta por el PP-A y un 20,2%, por el PSOE-A.

El 86,2% de los ciudadanos sitúa el paro como principal problema de Andalucía; seguido de la marcha de la economía (35,3%); de la política (28,8%); de la corrupción (28,3%); de la educación (19,1%), y de la sanidad (18,6%). Un 52,3% de los ciudadanos reconoce que llegan a fin de mes con mucha o cierta dificultad, frente al 8,5% que dice que llega con cierta o mucha facilidad y un 39,1% que señala que con normalidad.

A esas cantidades, la dirigente de los populares añade los «60 millones» que la Junta «ha recortado» de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), así como la «suspensión unilateral de una orden de 2006 por la que los consistorios podían solicitar ayudas para la rehabilitación de patrimonio artístico y cultural», lo que, a su juicio, «pone en riesgo el patrimonio y el turismo de los pueblos andaluces de interior», además de «condenar a sus pymes».

González Vigo se apoya en esos datos, y en la «negativa» de Griñán de recibir a los ediles populares, para atribuir a la Junta una actitud de «persecución y maltrato al municipalismo andaluz» que se explicaría por el triunfo del PP-A en las elecciones locales de 2011, que «el PSOE-A aún no ha superado» y que le habría llevado a «bloquear 18 meses la FAMP, la institución más importante de representación de los ayuntamientos».

## Urgen a Griñán a crear un fondo de liquidez para los ayuntamientos

El PP le sugiere emular a Rajoy con un FLA autonómico dotado con mil millones

Sevilla

El PP-A reclamó ayer al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que se reúna con los alcaldes de las ocho capitales de provincia, los presidentes de las ocho diputaciones y la de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la popular María de los Ángeles Muñoz, así como la creación de una Conferencia de Alcaldes y de un «fondo de liquidez» similar al FLA pero para ayuntamientos y mancomunidades, con mil millones de euros.

Según avanzó ayer en rueda de prensa en Sevilla la coordinadora de Política Municipal del PP-A, Carolina González Vigo, trasladará en breve su propuesta al Parlamento, justificada por el dinero que los consistorios tienen que dedicar –«entre el 25 y el 35% de sus presupuestos»– a «políticas impropias» como «servicios sociales o educación», que «realmente son competencia de la Junta», pero que éstos «tienen que asumir por la dejadez» de la Administración autonómica.



La parlamentaria y dirigente del PP-A, Carolina González Vigo. / CONCHITINA

Además, González Vigo explicó que su formación ya planteó dicha propuesta anteriormente en la Cámara, si bien fue finalmente rechazada, a la vez que defendió que la dotación de mil millones vendría a ser el equivalente a la cantidad de dinero que «la Junta ha dejado de invertir en los

ayuntamientos mediante el Plan de Cooperación Municipal» –que cifra en «850 millones»– y a «la deuda que tiene reconocida la Junta con los consistorios», que, según indicó, el vicepresidente autonómico y consejero de Administración Local, Diego Valderas, eleva a «206 millones».